

ESTADO Y CLASES POLÍTICAS



Sistema político y movimiento partidario (1920-1990)

Sofía Correa Sutil
Museo Histórico Nacional

Una reflexión sobre el sistema político y el movimiento partidario requiere comenzar, a mi juicio, con un análisis del Estado y, específicamente, del sistema político. Situaré este análisis en el período que va entre las décadas de 1920 y 1960.

Al respecto, el principal rasgo del Estado chileno de esos años es que en él se da una combinación de elementos propios de un sistema liberal representativo, y elementos característicos del corporativismo. Obviamente, la división de los poderes del Estado, la generación del Ejecutivo y Legislativo por sufragio universal, y el sistema partidista, constituyen el corazón de la organización estatal liberal representativa. Paralelamente, el aparato burocrático asume caracteres corporativistas justamente cuando el Estado asume funciones económicas y sociales, en los años veinte.

El crecimiento del aparato estatal durante la primera presidencia de Ibáñez se caracterizó por el hecho de que las nuevas agencias y empresas fiscales fueron dirigidas por Consejos en los cuales se aseguró una significativa representación empresarial, a través de las asociaciones empresariales que existían ya desde el siglo diecinueve, a saber: la Cámara Central de Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de

Minería y la Sociedad de Fomento Fabril.

Hay varios aspectos que destacar respecto a las características específicas de este tipo de organización corporativa. En primer lugar, es necesario diferenciarla de corporativismo clásico. En el caso chileno, las asociaciones empresariales representadas en el Estado son asociaciones voluntarias que no tienen asegurado por ley el monopolio de la representación sectorial, ni están controladas ni financiadas por el Estado. De modo que son independientes del Ejecutivo, a la vez que no representan necesariamente a todo el sector productivo respectivo. Concretamente, las asociaciones empresariales chilenas entre los años veinte y sesenta representaban al gran capital, aunque sus pretensiones fuesen universales. Como ha destacado Constantine Menges en su artículo sobre la representación corporativa en Chile, en 1968 las cuatro principales asociaciones empresariales ya mencionadas representaban el 80 por ciento del volumen físico de la producción y del comercio, aunque entre sus afiliados potenciales sólo pertenecían a ellas entre un 10 y un 18 por ciento, con excepción de la Sociedad Nacional de Minería que tenía una afiliación más representativa.

Las asociaciones empresariales tenían también

una gran influencia en el proceso legislativo en el Congreso Nacional, pues, por su capacidad de producir análisis técnicos, eran invitadas a participar en los trabajos de los comités de diputados y senadores. De esta forma, prácticamente redactaban los proyectos de ley concernientes al sector productivo al cual representaban.

Es importante destacar que hasta los años sesenta la influencia de las asociaciones empresariales en el Estado no fue cuestionada; más bien, como recién señalábamos, ella fue buscada por los comités parlamentarios. Obviamente, la representación corporativa empresarial puso límites muy claros a las posibilidades reformistas de los gobiernos radicales; pero ello fue así sobre todo porque éstos no intentaron nunca cuestionar esa influencia. Más bien la legitimaron en la medida en que los dirigentes del Partido Radical buscaron integrar las directivas de las asociaciones empresariales, lo que lograron fácilmente, como se ve al revisar los nombres de los consejeros empresariales en los años cuarenta y cincuenta.

Ahora bien, en ese Estado con características mixtas se desarrollaron las clases políticas. Así, en plural, me parece una formulación convincente. A mi juicio, para el período que estoy analizando, las clases políticas son fundamentalmente tres: la dirigencia partidista, la dirigencia empresarial y la dirigencia sindical.

Como vimos, la dirigencia empresarial tenía una representación directa en el Estado, además de establecer estrechos vínculos con los partidos políticos, muchas veces compartiendo los mismos miembros. Se trata de los partidos de derecha, también en importante medida del Partido Radical, y en cierta forma del Partido Socialista y la Falange Nacional, que compartían miembros con la Sociedad Nacional de Minería, como por ejemplo Oscar Schnake y Eduardo Frei.

Este entrecruzamiento se daba intensamente entre los dirigentes sindicales y los dirigentes de los partidos de izquierda, como es ampliamente conocido. Es de esa manera como la dirigencia sindical se constituyó en clase política.

En cuanto a la dirigencia partidista, su fuente de poder radicaba, obviamente, en el apoyo electoral que pudiera suscitar. Aparte de la adhesión

consciente por motivos doctrinarios o de tradiciones familiares, una importante proporción del voto respondía al cohecho, al paternalismo y al clientelismo. Un clásico partido clientelista era el Partido Radical, a la vez que el paternalismo, especialmente arraigado en los campos, otorgaba un fuerte peso electoral a los partidos de derecha.

Se ha dicho que la estabilidad política de esos años se explicaría por un agro sin reformas, sin sindicalización, lo cual garantizaría una importante representación parlamentaria a la derecha. Quiero, en cambio sugerir que la estabilidad política entre los años veinte y sesenta se debió a que el sistema político recogió y expresó lo que hoy llamamos los poderes fácticos. El peso real de las diversas clases políticas se expresaba en el Estado. Ahora bien, fue justamente esta característica del sistema político la que comenzó a ser cuestionada en los años sesenta, precipitando hacia finales de la década una intensa crisis política.

Es posible sugerir que este cuestionamiento tuvo origen en gran medida en las transformaciones que se produjeron en el debate intelectual, en la medida en que historiadores y abogados eran desplazados por economistas y sociólogos. Estos últimos suponen que la realidad puede ser reconstruida una vez que se han aislado las variables indeseables, entre las que se cuentan las influencias, supuestamente indebidas, de los poderes fácticos. No poco contribuyeron estos intelectuales a desprestigiar el clientelismo, que aparecía como rémora a la formulación de políticas de modelación de la realidad.

Paralelamente, en la dirigencia partidista los parlamentarios perdieron gran parte de un enorme influencia, cuyas raíces estaban justamente en el carácter clientelístico de la política. Por otra parte, junto con neutralizar el clientelismo, la dirigencia política provocó una ampliación hasta entonces desconocida del sufragio. A esas nuevas masas de votantes se les incorporó al sistema político por medio de un discurso fuertemente ideológico, ya que se había deslegitimado una incorporación clientelística. Con un discurso ideológico de promesas de cambios estructurales, compitieron entre sí los partidos. En este contexto se sitúa la crisis del Partido Radical, y de los partidos Liberal

y Conservador, así como también la transformación de los partidos de la izquierda y el paso de la Falange Nacional a la Democracia Cristiana.

Cuando la Democracia Cristiana tomó el control del Ejecutivo, implementó un ataque sistemático a la representación corporativa del empresariado, logrando al menos neutralizar su influencia al interior de las agencias y empresas estatales. Es posible sugerir que, a consecuencia de ello, los poderes fácticos buscaron otras formas de expresión y de presión política, constituyéndose entonces el movimiento gremial, el cual terminó, al igual que la dirigencia partidista, por hacer política en las calles.

Así, el intento de neutralizar las fuentes de poder que limitaban las posibilidades de implementar reformas económico-sociales, terminó por arrasar con el sistema político.

A partir de esta reflexión, sugiero algunas preguntas para encauzar el análisis sobre el Estado y las clases políticas.

Habría que preguntarse quiénes son hoy las clases políticas, además de la dirigencia partidista; cuáles son sus formas de presencia en el Estado; cuál es su capacidad de poner límites a los proyectos partidistas.

En cuanto al sistema partidista, la pregunta central es sobre qué base se puede establecer la adhesión de la ciudadanía a los partidos políticos. Ello porque hoy en día estaríamos frente a una doble deslegitimación, la del clientelismo y la de los partidos ideológicos. Se propone en cambio el *ideal del partido tecnocrático, dada la hegemonía de la economía en la discusión política*. En la medida en que los partidos no otorgan beneficios concretos a su electorado, ni buscan suscitar en él adhesiones ideológicas altamente emotivas, es posible que estemos frente a una fuerte deslegitimación de los partidos políticos, lo que no ha estado nunca ausente de la política chilena contemporánea, pero que ahora podría tratarse de un fenómeno mucho más generalizado.